



Comité de Transparencia

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, el Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"

ACUERDO NUMERO SH/CT/C/013/2024

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GOVERNAMENTAL CON FOLIO NÚMERO
070121324000217.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Resolución del Comité de Transparencia de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Chiapas, correspondiente al treinta de octubre de dos mil veinticuatro.

RESULTANDOS

I.- La Unidad de Transparencia tuvo por recibida la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 070121323000217, en la que textualmente solicitaron:

"En mi derecho y a toda persona de solicitar gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de entregarla sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar su uso y en referente al artículo 23, fracción III de los Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a la Administración Pública Estatal en el Estado de Chiapas, tenga a bien proporcionar la siguiente información pública:

- 1.-cuantos servidores públicos de la Secretaría de Honestidad y Función Pública y de la Secretaría de Hacienda han solicitado y/o tramitado este derecho para reducir sus horarios laborales?
 - 2.- cuantos servidores públicos, clasificados por mujeres y hombres, de la Secretaría de Honestidad y Función Pública y Secretaría de Hacienda han solicitado y/o tramitado este derecho para reducir sus horarios laborales?
 - 3.- proporcione los nombres completos de los servidores públicos, de la Secretaría de Honestidad y Función Pública y Secretaría de Hacienda, que han solicitado y/o tramitado este derecho para reducir sus horarios laborales?
- Por lo anterior, muchas gracias. NUEVA ERA" [Sic]

II.- La Unidad de Transparencia, una vez analizada la naturaleza y contenido de la petición, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, estimó procedente turnar a la Unidad de Apoyo Administrativo y Coordinación General de Recursos Humanos el requerimiento de información respectivo, con el objeto de que en el ámbito de sus estrictas competencias atendieran la solicitud de información.

III.- Recibido el requerimiento de la Unidad de Transparencia, la persona servidora pública encargada de la Coordinación General de Recursos Humanos al remitir su respuesta manifestó que en cuanto al número de trabajadores ubicados en el supuesto señalado en el artículo 23 fracción III de los Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a la Administración Pública Estatal, realizada la búsqueda dentro de los archivos que obran en la Coordinación General de Recursos Humanos, no se localizó expresión documental alguna con la información solicitada, ni tampoco fue posible cuantificar el número de trabajadores beneficiados, toda vez que únicamente se cuenta con estadísticas generales y no específicas del personal, declarando la inexistencia de la información solicitada.

Ahora bien, la titular de la Unidad de Apoyo Administrativo al remitir su respuesta manifestó entre otras cosas, pone a disposición el listado de los nombres de los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda que han ejercido el beneficio del derecho para reducir sus horarios; una vez realizado el análisis y valoración de la respuesta emitida por la Unidad de Apoyo Administrativo, la Unidad de Transparencia a través de su titular propone la clasificación confidencial referente a los nombres de los servidores públicos, por ser un dato personal de carácter identificable y/o identificativa por lo cual puede delimitar o reducir el número de servidores públicos al cuidado de los menores cursando el nivel inicial y básico de educación, pudiendo vulnerar la esfera privada de sus titulares; es decir, la intimidad de la vida privada de



Comité de Transparencia

*“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, el Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab”*

las personas servidoras públicas, máxime que la información solicitada es en ejercicio de un derecho más no de una obligación en ejercicios de sus funciones; evitando el uso inadecuado de las mismas por terceros, dato personal de la cual no se tiene la autorización expresa de sus titulares para darlas a conocer, información que de darse a conocer se puede vulnerar su derecho de protección, por lo que debe ser protegida por ser considerada como información confidencial, lo anterior en términos de los dispuesto por el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas y el trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

IV.-Con fecha 29 de octubre de 2024 la Unidad de Transparencia, atendiendo a las respuestas de los órganos administrativos competentes en términos de lo dispuesto en el artículo 66, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, remitió para deliberación del Comité de Transparencia la propuesta de acuerdo de clasificación de confidencialidad e inexistencia parciales de la información, en la que expuso lo siguiente:

*CC. Integrantes del Comité de Transparencia
de la Secretaría de Hacienda.*

Con fundamento en los artículos 66 fracción II, 70 fracciones II, IV; 119, 120, 121, 139, 160, 161 y 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, y el Cuarto, Séptimo fracción I y el trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, esta Unidad de Transparencia presenta la propuesta de acuerdo de clasificación de confidencialidad de la información correspondiente a los nombres de los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda que han ejercido el derecho contemplado en el artículo 23 fracción III de los Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a la Administración Pública Estatal; así como la inexistencia de la información referente a la Secretaría de la honestidad y Función Pública con motivo de la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 070121324000217 recibida a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que solicitaron lo siguiente:

“En mi derecho y a toda persona de solicitar gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de entregarla sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar su uso y en referente al artículo 23, fracción III de los Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a la Administración Pública Estatal en el Estado de Chiapas, tenga a bien proporcionar la siguiente información pública:

1.-cuantos servidores públicos de la Secretaría de Honestidad y Función Pública y de la Secretaría de Hacienda han solicitado y/o tramitado este derecho para reducir sus horarios laborales?

2.- cuantos servidores públicos, clasificados por mujeres y hombres, de la Secretaría de Honestidad y Función Pública y Secretaría de Hacienda han solicitado y/o tramitado este derecho para reducir sus horarios laborales?

3.- proporcione los nombres completos de los servidores públicos, de la Secretaría de Honestidad y Función Pública y Secretaría de Hacienda, que han solicitado y/o tramitado este derecho para reducir sus horarios laborales?

Por lo anterior, muchas gracias. NUEVA ERA” [Sic]

Sobre el particular, el artículo 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas dispone que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, atribuciones o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre.

En este contexto, la Unidad de Transparencia, una vez analizadas las competencias de los órganos administrativos de la Secretaría de Hacienda, requirió a la Unidad de Apoyo Administrativo y a la Coordinación General de Recursos Humanos, la información solicitada, instancias que al dar respuesta advierten por parte de la Coordinación General de Recursos Humanos la inexistencia de la información solicitada; ahora bien en relación a la manifestaciones hechas por la Unidad de Apoyo Administrativo, está pone a disposición entre otras cosas el listado de las personas servidoras públicas de la Secretaría de Hacienda que ejercen el beneficio al derecho contemplado en el artículo 23 fracción III de los Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a la Administración Pública Estatal; por lo que analizada la respuesta esta Unidad de Transparencia advierte la clasificación de la información correspondiente al



Comité de Transparencia

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, el Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"

nombre de los servidores públicos; por lo que propone la clasificación con carácter de confidencialidad, para los efectos de protegerla por ser un dato personal de carácter identificable y/o identificativa por lo cual puede delimitar o reducir el número de servidores públicos al cuidado de los menores cursando el nivel inicial y básico de educación, pudiendo vulnerar la esfera privada de sus titulares; es decir, la intimidad de la vida privada de las personas servidoras públicas, máxime que la información solicitada es en ejercicio de un derecho más no de una obligación en ejercicios de sus funciones; evitando el uso inadecuado de las mismas por terceros, dato personal de la cual no se tiene la autorización expresa de sus titulares para darlas a conocer, información que de darse a conocer se puede vulnerar su derecho de protección, por lo que debe ser protegida por ser considerada como información confidencial, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas y el trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas

Lo anterior, ya que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Ley Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías establecidas para su protección constitucional, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones en que la propia Constitución lo autoriza.

Asimismo, se prevé que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, en tanto que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la Ley.

Sobre el particular el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas establece que será información confidencial la que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, así como los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, a sujetos internacional o sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos y aquella información que presenten los particulares como tal a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano.

En este contexto, se establece como confidencial la información solicitada toda vez que la misma implica el acceso a un dato personal de identificación a las personas, información de la cual no se cuenta con autorización expresa del titular para darlas a conocer y en tal virtud, esta debe ser protegida en términos de los artículos 139, 140 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, y el Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de dar respuesta a la Solicitud de acceso a la información multicitada, esta Unidad a mi cargo presenta para la deliberación del Comité de Transparencia de la Secretaría de Hacienda, la presente propuesta de declaración de clasificación con carácter de confidencial e inexistencia parciales de la información solicitada."

CONSIDERANDOS

- I. Que este Comité de Transparencia de la Secretaría de Hacienda es competente para conocer y resolver el presente procedimiento de solicitud de acceso a la información pública, en términos de lo establecido en los artículos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 66, fracción II, 129 fracción I, 160, 161 y 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, el Cuarto, Séptimo, fracción I; y Trigésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.
- II. Que es materia de este Órgano Colegiado resolver sobre la propuesta de clasificación de confidencialidad, y con plenitud de jurisdicción, adoptar las medidas que resulten pertinentes para



Comité de Transparencia

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, el Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"

asegurar la protección, custodia, resguardo y conservación de la información clasificada como confidencial en términos del artículo 133 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, así como confirmar la declaración de inexistencia respecto de aquella información que no obre en los archivos de la Secretaría de Hacienda.

III. Que debe de tomarse en cuenta al resolver el presente asunto los artículos 6o., apartado A fracciones I, II, VII y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la parte conducente que se relaciona al caso, dice:

"Artículo 6o.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

[...]

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I.- Toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza fondos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

II.- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

[...]

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

[...]

La Ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial."

"Artículo 16. [...]

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros."

Como se puede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6o., Apartado A, fracción II, constitucional, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben ser protegidos en los términos que fijen las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafo segundo, constitucional, se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales.

IV. Que para efectos del derecho de acceso a la información pública la Constitución Política del Estado de Chiapas establece que:

Artículo 5o. Toda persona tendrá derecho:



Comité de Transparencia

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, el Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"

Fracción X. A no ser molestada a causa de sus opiniones; podrá investigar y recibir información pública y difundirla, por cualquier medio de expresión.

Fracción XV. A acceder a la información pública gubernamental.

V. Que en atención a la solicitud formulada por el particular, en donde se desprende la petición de información siguiente:

"En mi derecho y a toda persona de solicitar gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de entregarla sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar su uso y en referente al artículo 23, fracción III de los Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a la Administración Pública Estatal en el Estado de Chiapas, tenga a bien proporcionar la siguiente información pública:

1.-cuantos servidores públicos de la Secretaría de Honestidad y Función Pública y de la Secretaría de Hacienda han solicitado y/o tramitado este derecho para reducir sus horarios laborales?

2.- cuantos servidores públicos, clasificados por mujeres y hombres, de la Secretaría de Honestidad y Función Pública y Secretaría de Hacienda han solicitado y/o tramitado este derecho para reducir sus horarios laborales?

3.- proporcione los nombres completos de los servidores públicos, de la Secretaría de Honestidad y Función Pública y Secretaría de Hacienda, que han solicitado y/o tramitado este derecho para reducir sus horarios laborales?

Por lo anterior, muchas gracias. NUEVA ERA" [Sic]

Que al respecto la Unidad de la Unidad de Transparencia en la propuesta de clasificación realizó diversas valoraciones de los que surgen los siguientes argumentos:

"[...] advierte la clasificación de la información correspondiente al nombre de los servidores públicos; por lo que propone la clasificación con carácter de confidencialidad, para los efectos de protegerla por ser un dato personal de carácter identificable y/o identificativa por lo cual puede delimitar o reducir el número de servidores públicos al cuidado de los menores cursando el nivel inicial y básico de educación, pudiendo vulnerar la esfera privada de sus titulares; es decir, la intimidad de la vida privada de las personas servidoras públicas, máxime que la información solicitada es en ejercicio de un derecho más no de una obligación en ejercicios de sus funciones; evitando el uso inadecuado de las mismas por terceros, dato personal de la cual no se tiene la autorización expresa de sus titulares para darlas a conocer, información que de darse a conocer se puede vulnerar su derecho de protección, por lo que debe ser protegida por ser considerada como información confidencial, lo anterior en términos de los dispuesto por el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas y el trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas".

Qué en este contexto, del análisis del contenido de la propuesta de clasificación de información, así como de la respuesta emitida por la titular de la Unidad de Apoyo Administrativo y el contenido de la solicitud de información se concluye, por una parte que la persona solicitante requiere conocer cuántos servidores públicos han ejercido el beneficio al derecho contemplado en el artículo 23 fracción III de los Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a la Administración Pública Estatal, clasificados a su vez por género, incluyendo dentro de estos los datos relacionados con los nombres completos de los servidores públicos, por otra la manifestación por parte del titular de la Unidad de Transparencia de la imposibilidad de dar a conocerlas en los términos solicitados, restringiendo el acceso al dato referente a los nombres de los servidores públicos por ser considerados información de carácter identificable y/o identificativa que puede reducir el número de servidores públicos al cuidado de los menores cursando el nivel inicial y básico de educación, por lo que es importante proteger dicha información para evitar vulnerar la esfera privada de sus titulares, es decir la intromisión en la intimidad de la vida privada de las personas públicas evitando con ello la vulneración de su derecho de protección, máxime que la información solicitada es en ejercicio de un derecho más no de una obligación en ejercicio de sus funciones, evitando con ello el uso inadecuado de las mismas; al ser un dato personal de carácter identificativo de las cuales no se cuenta con la autorización de los titulares para darse a conocer y por ende, confidenciales.



Comité de Transparencia

*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, el Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"*

Este Comité colige que la Unidad de Transparencia, al realizar la valoración documental de la información solicitada, de forma acertada consideraron la clasificación de confidencialidad referente a los nombres de los servidores públicos, por tratarse de información de la cual no se cuenta con la autorización del titular para darse a conocer, misma que puede vulnerar su derecho de protección, esto por tratarse de datos personales de carácter identificable e información que podría afectar a la esfera de privacidad de los servidores públicos por lo tanto, dicha información tiene el carácter de confidencial.

De lo antes expuesto, es posible advertir que el dato que será omitido refiere a un dato personal que únicamente concierne a su titular, por lo que esta incide en la intimidad de un individuo identificado o identificable, es decir, se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información que para el presente caso lo es el nombre completo; en ese sentido, se considera el nombre como un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la identidad, en razón de que por sí mismo permite identificar a una persona.

Al respecto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas señala en el artículo 139 se considerará confidencial la información que presenten los particulares como tal a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, en relación al Trigésimo Octavo fracción I, que se considera información clasificada lo referente a la información que se entregue con tal carácter por los particulares; así mismo el diverso 140 de la Ley de la materia en transparencia determina que la clasificación de confidencialidad no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.

Ahora bien, por su parte, el artículo 144 de la ley local de la materia dispone que para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial deberán contar con el consentimiento expreso de los titulares de la información, situación que no se actualiza, toda vez que la titular de la Unidad de Apoyo Administrativo no señala tener la autorización correspondiente para dar a conocer la información solicitada.

Así, en términos de lo previsto en los artículos 139 y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, se advierte que se consideran como información confidencial, los datos personales que requieren del consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal toda información concerniente a una persona física identificada o identificable.

Ahora bien, en términos de los artículos 139, último párrafo de la Ley en mención, en los casos en que los particulares entreguen a los sujetos obligados la información con carácter de confidencial, se deberán señalar los documentos que la contengan, en el supuesto de que tengan el derecho de reservarse tal información, por lo que la misma sólo puede ser difundida cuando medie el consentimiento expreso del titular de la información confidencial.

En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte de los titulares de la información, ni de sus representantes, para la difusión de la misma, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros no es procedente, conforme a lo previsto en los artículos.

Por tal razón, los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar la información confidencial que obra bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que exista el



Comité de Transparencia

*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, el Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"*

consentimiento expreso de los propios titulares de la información, por lo que sólo éstos o sus representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en términos de los artículos 139 y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas.

En respaldo de lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación:

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los datos personales, el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información confidencial, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público -para todas las personas independientemente del interés que pudieren tener a los datos personales distintos a los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información.

Tesis: 1a. VII/2012 (10a.), Aislada, Primera Sala, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, Página: 655, Registro: 2000233. Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTÍCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De conformidad con el artículo 40 del reglamento citado, para que las dependencias o entidades señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal puedan permitir el acceso a información confidencial, es necesario obtener el consentimiento expreso de los particulares titulares de la información, por escrito o medio de autenticación equivalente. En concordancia con esa regla, el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de información lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su autorización para entregarla, quien tendrá diez días hábiles para responder a partir de la notificación correspondiente, pues el silencio del particular será considerado como una negativa. La interpretación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en torno a que la facultad de la autoridad administrativa de requerir al particular la entrega de información confidencial que se le hubiera solicitado es de carácter potestativo, pues la norma estatuye que "si el comité lo considere pertinente, podrá hacer tal requerimiento", locución que denota la aptitud de ponderar libremente si se ejerce o no dicha atribución.

Tesis: I.10.A.61 A (10a.), Aislada, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia(s): Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, Página: 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA



Comité de Transparencia

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, el Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 16/2014. Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A.C. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Agustín Gaspar Buenrostro Massieu.

De esta manera, la clasificación de confidencialidad es una excepción constitucional y legal al derecho de acceso a la información, a través de la cual se protegen los datos personales de terceros, respecto de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos y la presentada por los particulares con tal carácter.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas y los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de las Versiones Públicas reconocen en la Entidad la dualidad de obligaciones sustanciales a cargo de los sujetos obligados, siendo, por un lado, otorgar el acceso de cualquier ciudadano a la información pública que tengan en su poder y, por otro, proteger la información considerada como confidencial.

Respecto a lo anterior, el Artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia Ley local o estatal reglamentaria de la materia, establecen que la información gubernamental es pública y, aunque todo ciudadano tenga derecho a obtenerla, este acceso se deberá otorgar de acuerdo con las disposiciones que establece la Ley. [Énfasis añadida]

En ese sentido, el jurista Ignacio Burgoa Orihuela ha manifestado que *dentro de la relación jurídica llamada garantía individual, tales derechos no son absolutos en el sentido de estar consignados irrestrictamente en la norma constitucional reguladora, pues ésta, al consagrarlos, les fija una determinada extensión. La demarcación de los derechos públicos subjetivos, por otra parte, se justifica plenamente por imperativos que establece la naturaleza misma del orden social, ya que no es posible suponer que dentro de la convivencia humana el Derecho que la organiza y encausa y autorice a todo ente gobernado desplegar ilimitadamente su actividad. La Constitución fija la extensión de los derechos públicos subjetivos. Esa fijación entraña, inherentes a la vida social, determinadas prohibiciones que se imponen a la actividad del gobernado a efecto de que, mediante el ejercicio de ésta, no se lesione una esfera particular ajena ni se afecte el interés o el derecho de la sociedad. Esas limitaciones las consignan las diversas normas constitucionales que regulan las diferentes garantías individuales.*¹

Las garantías constitucionales no pueden ser ejercidas de manera irrestricta por sus titulares, sino que encuentran limitantes en los derechos de terceros y en razones de interés público. El párrafo sexto del apartado A del Artículo 6o. de la Constitución Federal refiere que la ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos se encuentra previsto que el respeto a los derechos de terceros—como lo es la protección de los datos personales—y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho de acceso a la información. Por tanto, a efecto de analizar esta última manifestación, es importante citar en principio, el contenido del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. [...]

¹ BURGOA ORIHUELA, Ignacio. "Las garantías individuales". 32a. edición. Editorial Porrúa. México. 2000. p. 196.



Comité de Transparencia

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, el Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"

De esta forma, en el primer párrafo del artículo 1o. constitucional se prevé que todas las personas gozarán de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de derechos, a través del denominado bloque de constitucionalidad, consistente en la incorporación, al catálogo de derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, de los derechos humanos previstos en fuentes internacionales, como son los tratados y convenciones; sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también es parte de tal bloque.²

En el párrafo tercero del artículo 1o. constitucional se establece que todas las autoridades están obligadas, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos

Por otra parte, en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se encuentra previsto lo siguiente:

"Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia."

Así mismo en el artículo 5 de la Ley local de la materia prevé lo siguiente:

"Artículo 5.- La transparencia y el derecho de acceso a la información se garantizará conforme a los principios rectores y bases generales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, además de aquella interpretación realizada por los órganos internacionales especializados, así como lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas."

Así tenemos que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas al derecho de acceso a la información y sus excepciones, deben ser interpretadas conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los siguientes términos:

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones las autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver asuntos en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, tutelado en su fracción II, y en los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, así como de fundamentación y motivación adecuada, previstos en los artículos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar los efectos que ello pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene encomendado aplique las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo de alguno de los

² Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, "Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano", en Carbonell, Miguel, y Pedro Salazar (Coords.), La Reforma Constitucional de Derechos Humanos: un nuevo paradigma, México, IIJ-UNAM, 2011, p. 356.



Comité de Transparencia

“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, el Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab”

derechos de la persona, máxime que el artículo 6o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone que el derecho de acceso a la información pública se interpretará conforme a la Constitución General de la República, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, así como a la interpretación (jurisprudencia) que de ellos hayan realizado los órganos internacionales especializados.

Tesis: 2a. LXXV/2010, Aislada, Segunda Sala, Novena Época, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Página: 464, Registro: 164028. Precedentes: Instancia: Amparo en revisión 1922/2009. Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V. y otra. 30 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García.

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial –datos personales– como excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se dirima una controversia en la que estén involucrados estos derechos, existe la obligación de atender el marco jurídico nacional y los ordenamientos internacionales, así como la jurisprudencia de los órganos internacionales especializados.

Sobre esta tesis, es importante subrayar que los servidores públicos integrantes del Comité de Transparencia, de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumplir con las obligaciones aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las disposiciones contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo que en el caso que nos ocupa, se debe garantizar la protección de la información, respecto de aquéllos en los que no haya consentimiento de su titular para su difusión, por tratarse de información clasificada como confidencial.

Respecto de la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos humanos, resulta aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país:

DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTÍA. Del artículo 1o. de la Constitución Federal, así como de los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional y convencional de respeto y garantía -dentro de esta última se encuentra la obligación de reparar de los derechos humanos. Así, todas las autoridades tienen que respetar los derechos humanos y, en el ámbito de su competencia, garantizar su ejercicio y reparar cuando se cometen violaciones contra estos derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantía presupone obligaciones positivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber de garantía se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación.

Tesis: 1a. CCCXL/2015 (10a.), Aislada, Primera Sala, (Constitucional), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 2010422. Precedentes: Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la información y sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación:

“Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión¹. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

- a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
 - b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
- [...]”



Comité de Transparencia

*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, el Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"*

En este artículo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de buscar, recibir y difundir información. Dentro de los supuestos de "buscar" y "recibir" información, se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte que tal precepto establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respeto a los derechos de terceros, como lo es en el presente caso, la protección de la información con carácter de confidencial.

En relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal encargado de salvaguardar que los Estados parte de la misma, y particularmente, aquellos que aceptaron su competencia contenciosa,³ como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten, protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos.

En relación a lo anterior se estima pertinente señalar que, si bien a través del derecho de acceso a la información previsto en los artículos 6o., apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cualquier persona puede tener acceso a la información en posesión de los sujetos obligados, también existen restricciones al respecto, como son la información reservada y la información confidencial. La divulgación de información confidencial representa un riesgo inherente a la identidad de las personas jurídicas que de revelarse pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo, así como vulneración a la vida privada y a la protección de la información, ya que darse a conocer la misma conllevaría una afectación directa a las personas titulares de tal información.

Así tenemos que tanto el derecho de acceso a la información como los derechos a la vida privada y a la protección de los datos personales, constituyen fines legítimos, los cuales están consagrados en el marco constitucional e interamericano aludidos. De esta forma, se considera que, en el caso concreto, debe prevalecer la protección de la información, lo cual tiene sustento en el marco jurídico mencionado.

Se concluye que la afectación que podría traer la divulgación de la información que nos ocupa, es mayor que el interés público de que se difunda, por lo que se considera que en este caso debe prevalecer su confidencialidad, puesto que ello representa el medio restrictivo disponible para evitar un perjuicio al derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales.

Ahora bien, el artículo 132 de la multicitada ley local de transparencia y acceso a la información establece que los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en materia de clasificación de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados.

Sobre el particular, la fracción I, del Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, establece que se actualiza el supuesto de confidencialidad tratándose de información que se refiera a datos personales.

En este contexto, al determinar por disposición de ley la clasificación de confidencialidad a la información relacionada con los datos personales, el derecho fundamental de acceso a la información pública se encuentra restringido y, por ende, es responsabilidad de los sujetos obligados garantizar su protección y secreto.

³ El Decreto Promulgatorio de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue publicado el 24 de febrero de 1999 (y el 25 de febrero de 1999 su Decreto Aclaratorio) en el Diario Oficial de la Federación.



Comité de Transparencia

*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, el Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"*

Al respecto el artículo 121 de la ley multicitada ley local de transparencia, señala que los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de la clasificación de la información y en ningún caso pueden contravenirla, resultando procedente, por los fundamentos y argumentos ofrecidos por la Unidad de Transparencia, proponer la clasificación con carácter confidencial de la información correspondiente a los nombres de las personas servidoras públicas que han ejercido el beneficio al derecho contemplado en el artículo 23 fracción III de los Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a la Administración Pública Estatal, información en posesión de la Secretaría de Hacienda y bajo el resguardo de la Unidad de Apoyo Administrativo y por ende, restringir el acceso.

Que la Ley local de la materia en su artículo 140 señala que la información confidencial conservará ese carácter de manera indefinida, en tanto no se dé alguno de los supuestos contemplados por la Ley. Dichas excepciones para una debida clasificación de la información deben considerarse y descartarse.

Es de resaltarse que la Ley de la materia establece como excepciones a la absoluta confidencialidad de la información, los siguientes casos:

- a) Que cuente con el consentimiento expreso, por escrito o medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información que contenga datos personales;
- b) Que la información se encuentre en registro públicos o fuentes de acceso público;
- c) Que se transmita entre las dependencias y entidades, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de sus atribuciones;
- d) Sujeta a una orden judicial;
- e) Que las dependencias o entidades transmitan a un tercero contratado para la realización de un servicio, sin que pueda utilizarse para otro fin distinto, o que obtengan para evaluar las propuestas técnicas y económicas con motivo de la celebración de un contrato otorgado a través de un procedimiento de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa;
- f) Relacionada con el otorgamiento de estímulos, apoyos, subsidios y recursos públicos;
- g) Por razones de seguridad y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación;
- h) Necesaria para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos, y
- i) Por ley tenga el carácter de pública.

De la descripción anterior y analizada la solicitud de información del particular, se desprende que la misma no se ubica en ninguna de las excepciones a la obligación de confidencialidad de la información que en diversos artículos la ley dispone, lo que viene a reiterar la imposibilidad legal para proporcionar la información, en consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de confidencialidad propuesto por el titular de la Unidad de Transparencia respecto del dato personal referente a los nombres completos de los servidores públicos en términos de lo dispuesto por los artículos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 66, fracción II y 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, instruyendo al titular de la Unidad de Apoyo Administrativo a que adopte las medidas necesarias para asegurar la protección, custodia, resguardo y conservación de la información hoy clasificados como confidenciales.



PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

12



Comité de Transparencia

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, el Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"

VI. En atención a la manifestación de inexistencia señalada por la Coordinación General de Recursos Humanos, este Comité de Transparencia considera lo siguiente:

Que la Coordinación General de Recursos Humanos, señala que este Sujeto Obligado Secretaría de Hacienda en el ámbito de su competencia de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas⁴, realizó la búsqueda dentro de los archivos que obran en la Coordinación General de Recursos Humanos, y no localizó expresión documental alguna con la información solicitada a través de la solicitud con número 070121324000217, aludida en el resultando I, ni tampoco fue posible cuantificar el número de trabajadores beneficiados por el derecho establecido en el artículo 23 fracción III de los Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a la Administración Pública Estatal, toda vez que se cuenta únicamente con estadísticas generales y no específicas del personal, por tal razón no fue posible localizar la información de referencia, en consecuencia, declara formalmente la inexistencia correspondiente.

Así mismo el artículo 6o. de los Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a la Administración Pública Estatal⁵ advierte que el organismo administrativo encargado entre otras de aplicar y vigilar el cumplimiento de los Lineamientos antes citado, será la Unidad de Apoyo Administrativo o su equivalente en las Dependencias y Entidades; a igual el diverso 54 fracción XIV señala que lo entes públicos a través de sus Unidades Administrativas serán las encargadas de la debida integración de del expediente del trabajador; por lo que es responsabilidad de dicho órgano administrativo registrar los datos generales, administrativos y personales que sustenten todos los procesos de Recursos Humano, mismo que a continuación se reproduce:

"Artículo 6.- El órgano administrativo encargado de difundir, interpretar, aplicar y vigilar el cumplimiento de los presentes Lineamientos, será la Unidad de Apoyo Administrativo o su equivalente en las Dependencias y Entidades, siguiendo los criterios que establezca la Secretaría a través de la Coordinación General.

Artículo 54.- La Dependencia o Entidad tendrá las siguientes obligaciones:

[...]

XIV. Vigilar a través de sus respectivas Unidades Administrativas la debida integración del expediente del trabajador.

Por lo que, será responsabilidad de dichas áreas registrar los datos generales, administrativos y personales que sustenten todos los procesos de Recursos Humanos, así como la actualización de los mismos, tales como:

- a) Estado civil.*
- b) Domicilio.*
- c) Nacionalidad.*
- d) CURP y RFC.*
- e) Número de seguridad social.*
- f) Información general de sus descendientes y en su caso de la persona con quien tenga vida conyugal o concubinato.*
- g) Escolaridad. "[Sic]"*

En ese contexto, atendiendo lo señalado en el diverso 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, resulta atinada la declaración de inexistencia, toda vez que no

⁴ Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal: http://www.haciendachiapas.gob.mx/marco-juridico/Estatal/informacion/Leyes/ley_organica.pdf

⁵ Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a la Administración Pública Estatal: http://www.haciendachiapas.gob.mx/marco-juridico/Estatal/informacion/Lineamientos/Generales/LINEAMIENTOS_RH.pdf



Comité de Transparencia

*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, el Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"*

se administra, resguarda ni controla información desagregada o específica de los trabajadores de los entes públicos como lo requiere la persona solicitante; por lo que es dable orientar al solicitante presente su requerimiento de información ante el ente público que en razón del ámbito de su competencia pudieran contar con la información solicitada, que en el presente caso resultan ser la Secretaría de la Honestidad y Función Pública.

Al respecto, debe tenerse en consideración lo establecido en el primer párrafo del artículo 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, misma que señala lo siguiente:

"Artículo 157.- Los Sujetos Obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, atribuciones o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre."

Con base en lo anterior, se advierte que el procedimiento para declarar la inexistencia de documentación lo regula los artículos 161 y 162 de la multicitada ley, misma que establece a la letra, lo siguiente:

Artículo 161.- Cuando la información no se encuentre en los archivos de las áreas del Sujeto Obligado, el Comité de Transparencia:

- I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información.
- II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento.
- III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, atribuciones, competencias o funciones, o que previa acreditación de las cuales no ejerció dichas facultades, de responsabilidad administrativa que correspondan, lo cual deberá ser notificado al solicitante.
- IV. Notificará al órgano interno de control del Sujeto Obligado, quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.

Artículo 162.- La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, minucioso y razonable, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma.

De las disposiciones anteriores se advierte que para declarar materialmente la inexistencia de la información solicitada, la dependencia debe cumplir al menos con lo siguiente:

- I. La unidad administrativa responsable deberá enviar un informe en el que se exponga la inexistencia al Comité de Transparencia;
- II. El Comité de Transparencia analizará el caso y tomará las medidas pertinentes para localizar la información solicitada;
- III. En caso de no encontrarse, el Comité de Transparencia expedirá una resolución que comunique al solicitante la inexistencia de la información solicitada, y
- IV. La Unidad de Transparencia notificará al recurrente la resolución del Comité de Transparencia.

De las constancias que integran el expediente de la solicitud de información de mérito, se advierte que el órgano administrativo requerido cumple al remitir a este órgano colegiado un informe en el que exponen, bajo su más estricta responsabilidad, las razones por las cuales les llevó a declarar la inexistencia de la información en la solicitud de mérito, y por lo tanto, este Comité de Información ha analizado el caso y tomado las medidas pertinentes para localizar en esta dependencia la mencionada información, sin



Comité de Transparencia

*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, el Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"*

lograrlo; en consecuencia, agotó el procedimiento contenido en los artículos 157, 158 y 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas.

Es así que, de los argumentos expuestos por la Coordinación General de Recursos Humanos y la Unidad de Transparencia, este órgano colegiado coincide con las razones y fundamentos que motivaron la propuesta de declaración de Confidencialidad e inexistencia parciales en la solicitud de información de mérito.

Emitidos los comentarios de cada uno de los miembros del Comité de Transparencia, por unanimidad de votos y con fundamento en los preceptos aludidos y de conformidad con el artículo 66, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, este Comité de Transparencia confirma la declaración de clasificación de confidencialidad e inexistencia parciales en la solicitud de acceso a la información con número de folio 070121324000217.

De acuerdo lo anterior, se entiende que es de naturaleza pública cualquier dato o información que no hayan sido clasificados por el área administrativa citada, puesto que la clasificación de la información constituye una atribución de ésta, por lo que se concluye que este Comité sólo está en aptitud de confirmar la clasificación realizada por los organismos administrativos cuando así sea sometida a este órgano colegiado, de acuerdo con los datos señalados, en términos de los artículos 66 fracción II y 160 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas.

Que por lo expuesto y fundado este Comité de Transparencia

RESUELVE:

PRIMERO.- Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los preceptos legales citados en el Considerando I de esta resolución.

SEGUNDO.- En términos del considerando V, se confirmar la clasificación con carácter confidencial la información referente a los nombres de los servidores públicos con motivo de la solicitud de acceso a la información pública gubernamental con número de folio 070121324000217, teniendo ese carácter por tiempo indefinido, por actualizarse la hipótesis normativa prevista en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, en correlación con el Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

TERCERO.- En términos del considerando VI, se confirma la declaración de inexistencia parcial relacionada con la solicitud de información con número de folio 070121324000217, a través de esta resolución; de conformidad con los motivos y fundamentos expuestos en el Considerando VI.

CUARTO.- Se instruye a la Unidad de Apoyo Administrativo, adopte las medidas necesarias para asegurar la protección, custodia, resguardo y conservación de la información hoy clasificada como confidencial.

QUINTO.- Hágase del conocimiento el presente acuerdo a través de la Unidad de Transparencia, a efecto de proceder a su cumplimiento y difusión en términos del artículo 166 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas.

Así lo resolvió en sesión de fecha treinta de octubre de dos mil veinticuatro, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Hacienda, por unanimidad de votos de sus integrantes, Mtro. Moisés Pérez Hernández,

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

15



Comité de Transparencia

*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, el Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"*

Subprocurador de Resoluciones y de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal y Presidente del Comité de Transparencia; y los miembros Lic. Odilio Pérez Vicente, Director de Política del Gasto de la Subsecretaría de Egresos y el Mtro. Gabriel Alejandro Guerra Luis, Jefe de la Unidad de Planeación; estando presente el Mtro. Roberto Isaac Velázquez Córdoba, Jefe de la Unidad Transparencia, quien actúa en calidad de Secretario Técnico del Comité de Transparencia.

Presidente

Mtro. Moisés Pérez Hernández
Subprocurador de Resoluciones y de
lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal.

Lic. Odilio Pérez Vicente
Director de Política del Gasto

Mtro. Gabriel Alejandro Guerra Luis
Jefe de la Unidad de Planeación

Mtro. Roberto Isaac Velázquez Córdoba
Titular de la Unidad de Transparencia y
Secretario Técnico del Comité de Transparencia



PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

16

Las presentes firmas corresponden al acuerdo número SH/CT/C/013/2024, por el que se confirma la declaración de clasificación confidencial e inexistencia parciales de la información en la solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio 070121324000217, aprobado por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Hacienda, durante la sesión de fecha treinta de octubre de dos mil veinticuatro.